

que dirigirnos a conclusiones paralizantes, debería estimular el estudio y la reforma de los espacios de detención.

En definitiva, la historia del castigo en el siglo xx no se ajusta bien a los relatos que describen el devenir histórico en claves de evolución y progreso. El olvido, la inmovilidad, el atraso y endurecimiento son características que más cabalmente lo definen según los autores de este libro. El creciente coste que supone al Estado la población penal en tiempos de estrecheces para lo público podría asociar un nuevo término al castigo, la privatización, lo que descubriría otro horizonte de exploración en el siglo xxi. En todo caso, creo que los retos deberían pasar por descifrar todo lo que esconde y aglutina el tan recurrente, y a veces hermético, concepto de Estado. Descubrir qué o, mejor aún, quién hay detrás de las decisiones gubernamentales; analizar de dónde emerge y cómo se ha forjado esta cultura punitiva en la sociedad, esa percepción o sensibilidad colectiva obsesionada por el castigo penitenciario, transversal a todos los grupos sociales, como apunta Patricia Moreno en el epílogo, compartido por partidos políticos mayoritarios y minoritarios, medios de comunicación, movimientos sociales conservadores y progresistas; y explicar por qué no parecemos estar preparados o educados para los discursos reconciliadores y empáticos que apenas trascienden los ambientes académicos y el asociacionismo militante. Lo más difícil ya lo ha hecho el GEHPIP en esta obra, sentar las bases de una línea de investigación sin apenas tradición historiográfica en España, ahora queda ahondar, persistir y recoger nuevos y prometedores resultados.

Óscar Bascañán Añover

Universidad Complutense de Madrid

GABRIELE RANZATO: *El gran miedo de 1936. Cómo España se precipitó en la Guerra Civil*; La Esfera de los Libros, Madrid, 2014, 380 págs.

Los meses previos al estallido de la guerra civil de 1936 han sido desde hace mucho tiempo objeto prioritario de la atención de los historiadores. No en vano, a ese periodo miró desde el principio la propaganda de los sublevados para justificar la insurrección lanzada contra el gobierno republicano de izquierda aupado al poder en las elecciones de febrero de aquel año gracias al apoyo de una variada constelación de fuerzas obreras. Desde la perspectiva insurgente, la «España del Frente Popular» habría amalgamado y llevado a su máxima expresión, como ningún otro momento previo, los males y amenazas que supuestamente acarreó al país –a sus tradiciones, religión, orden social, economía o la misma integridad de la patria– la llegada de la Segunda República. Junto al deseo de atajar dichos *males*, proyectados en el *caos* social, el marcado desorden público y una insufrible violencia política, en último término el golpe militar que desembocó en la guerra habría encontrado su razón de ser y su legítimi-

dad en el intento de abortar una pretendida revolución comunista, cuya fecha se habría prefijado para aquel mismo verano.

Desde los años sesenta del siglo pasado, incontables historiadores de muy variada procedencia intelectual han sometido a prueba aquella versión de la historia republicana, que la dictadura franquista reiteró sin descanso y en la que adoctrinó a varias generaciones de españoles. Poco a poco, conforme la investigación fue avanzando, todas las piezas de aquella interpretación se cayeron por su propio peso. El final de la dictadura y la llegada de la democracia en la segunda mitad de los años setenta sin duda contribuyeron poderosamente a ello. En realidad, el empeño no fue difícil, siquiera porque la versión franquista de aquel pasado destilaba unos supuestos tan simplistas, sectarios y maniqueos que, a todas luces, se demostraron insostenibles.

Sin embargo, que la vieja interpretación de la extrema derecha ya no se la crea nadie en los medios académicos —otra cosa es la ciudadanía de a pie, donde los nostálgicos de la dictadura siguen haciendo ruido—, no ha implicado un acuerdo pleno entre los historiadores profesionales en torno a las causas y los procesos que desembocaron en la guerra civil. Sin duda, se aprecian muchas coincidencias, pero, por más que algunos se empeñen en lo contrario, no hay un «canon» incontrovertible al que todo el mundo esté dispuesto a rendir pleitesía (1). Afortunadamente, cabe añadir, porque no puede ser de otra forma, dada la extrema complejidad que reviste la historia de la Segunda República y dada la no menos extrema ideologización de la que no han sabido desprenderse algunos historiadores que gustan autodenominarse como «progresistas», obviando, conscientemente o no, que el verdadero progresismo pasa por un tratamiento honesto de las fuentes, la aplicación de un marco conceptual sólido y el desligamiento de todo prejuicio e idealizaciones interesadas a la hora de analizar, interpretar y narrar cualquier tiempo pasado.

Por desgracia, la historia de la República —en paz o en guerra— todavía arrastra la pesada carga representada por aquellos historiadores (pocos, en realidad, pero con influencia en los medios) que se empeñan en concebirla como un campo de batalla del presente. Esos mismos historiadores que se creen en posesión de toda la verdad, que militan a favor de una causa (la preservación inmaculada de la imagen de la República del Frente Popular en este caso), y que no dudan en estigmatizar como «conservadores», «revisionistas» o «neofranquistas» a los profesionales que no comulgan con sus visiones dogmáticas (2), por

---

(1) La obsesión por establecer un «canon» correcto al mirar a los años treinta, en, por ejemplo, Alberto Reig Tapia y Ángel Viñas: «Residuos y derivaciones franquistas», en Íd. (eds.): *En el combate por la historia. La República, la guerra civil, el Franquismo*, Barcelona, 2012, pp. 921-940.

(2) La propensión reciente a la descalificación ideológica y a poner etiquetas con absoluta ligereza se advierte, entre otros, en Chris Ealham: «The Emperor's New Clothes: 'Objectivity' and Revisionism in Spanish History», *Journal of Contemporary History*, n.º 48 (2013), pp. 191-202; Eduardo González Calleja: «La historiografía sobre la violencia política en la Segunda Re-

más que estos últimos hayan demostrado hasta la saciedad sus convicciones democráticas, su honestidad intelectual y su rigor científico. Para los historiadores proclives a la concepción bélica de la historia, todo lo que no interesa traer a colación de aquel pasado se ignora premeditadamente, cuando no se manipula con todo descaro y sin que les tiemble el pulso a sus mentores (3).

Gabriele Ranzato ha sido uno de los historiadores que ha sufrido en carne propia los ataques, tan injustificados como insolentes, de ese segmento historiográfico combatiente (4). De poco le han valido ante esos censores sus innegables credenciales académicas y su trayectoria investigadora impecable. Los denuestos vertidos contra él arrancan del cuestionamiento que en los últimos años ha venido haciendo el italiano del paradigma que podemos calificar «frentepopulista» (5) o, en sus mismas palabras, «neorrepblicano» (6), compendiado de forma brillante en el libro que se reseña aquí.

En *El gran miedo de 1936*, Ranzato nos ofrece un relato atractivo y muy documentado de los meses que precedieron al estallido de la guerra civil, si bien analiza también, aunque de forma más breve, los dos años anteriores, desde finales de 1933, momento en el que sitúa el punto de inflexión del proceso que condujo a la ruptura de la convivencia, tras el triunfo de las fuerzas de centroderecha en las elecciones y las respuestas que ello provocó por parte de sus adversarios. Su construcción no se hace deudora de teleología alguna ni se subordina al enfoque de la inevitabilidad de la contienda. Pero sí analiza, paso a paso, cómo se crearon y se fueron acumulando las condiciones ideales para que las conspiraciones de la extrema derecha encontraran un clima idóneo para lanzar un cruento golpe militar contra la democracia republicana.

El recorrido y sus fases son de sobra conocidos: la gestión de los gobiernos del Partido Radical, la larga sombra de la CEDA pendiendo sobre ellos, la insurrección de octubre del 34, su represión y sus repercusiones, la reacción de las izquierdas, la victoria electoral del Frente Popular... y todo lo que vino después. Lo que singulariza el relato de Ranzato y le confiere un punto de originalidad es el cambio de mirada, porque nuestro autor, explícitamente, apuesta por analizar los acontecimientos desde una atalaya poco transitada hasta ahora, la «de las clases medias moderadas» republicanas, aquellas que se com-

---

pública española: una reconsideración», *Hispania Nova* (revista on-line), n.º 11 (2013), y Alejandro Quiroga en «Book Reviews», *European History Quarterly*, n.º 43 (2013), pp. 519-520.

(3) Rudamente arquetípico resulta al respecto Francisco Sánchez Pérez: «¿Una guerra realmente inevitable?», en Íd. (ed.): *Los mitos del 18 de Julio*, Barcelona, 2013, pp. 7-53, 369-379. Sánchez Pérez, por cierto, no es ningún especialista ni se le conoce ninguna aportación relevante sobre el periodo.

(4) Entre otros, de nuevo, Francisco Sánchez Pérez: «Las protestas del trabajo en la primavera de 1936», *Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série*, 41 (2011), pp. 79-80.

(5) F. Sánchez Marroyo: «Un cuarto de siglo de análisis de la historia contemporánea desde la Universidad de Extremadura», *Norva. Revista de Historia*, vol. 22, 2009, p. 136.

(6) Gabriele Ranzato: «¿Es posible un auténtico debate historiográfico sobre la historia de la Segunda República y de la Guerra Civil?», *Historia del Presente*, n.º 22 (2013), pp. 151-164.

prometieron con la democracia y las políticas reformistas. Lo cual, sin embargo, no le hace desviar su atención –a diestra y siniestra– de sus enemigos (católicos, monárquicos...) o de sus compañeros de viaje (socialistas, comunistas...) de entonces, por cuyas fuentes específicas también transita.

En consecuencia, no es casualidad que Ranzato priorice las fuentes que reflejan el punto de vista, las actitudes, la opinión y la acción de los segmentos mesocráticos de izquierda, que en la época algunos denominaban *izquierda burguesa*: desde los testimonios y las memorias personales, la prensa de esa misma orientación (*Ahora, Política, El Liberal, El Sol...*), los documentos oficiales generados por los gobiernos, el *Diario de Sesiones de Cortes*, o, amén de otros materiales, la insigne voz de sus líderes más señeros (Martínez Barrio, Alcalá Zamora, el propio Azaña...). En ese juego coral, los diferentes actores quedan bien retratados, delimitándose la evolución de sus respectivas posiciones, sus contradicciones, límites y debilidades. En términos generales, desde la perspectiva de los principios, percepciones y valores democráticos de aquellos sectores, el balance de la primavera de 1936 no resulta precisamente positivo.

Se comprende entonces la inquina manifestada hacia el historiador italiano (y otros que sostienen interpretaciones más o menos parecidas) por aquellos que, contra viento y marea (eludiendo las más elementales evidencias empíricas), se empeñan en alimentar el muy idealizado paradigma *frentepopulista* con el tramposo argumento de que balances como los de Ranzato hacen el juego o defienden tesis parecidas a las de los insurgentes de 1936. Ingrediente tópico del citado paradigma es la afirmación de que la conflictividad y la violencia de la primavera de 1936 no guardaron relación alguna con el estallido de la guerra civil. Tal consideración formaría parte de la «leyenda negra» de la República construida ya entonces –y perpetuada *a posteriori*– por sus enemigos. Los discursos incendiarios y provocadores de las derechas en las Cortes, al amplificar y sobredimensionar el problema de la violencia, habrían creado artificialmente el ambiente propicio para el golpe de Estado. El pistolero desplegado por los ultraderechistas en las calles habría formado parte de la misma estrategia «de tensión» dirigida a desestabilizar el régimen. En realidad, las manifestaciones violentas, las huelgas y, en general, todos los conflictos de aquellos meses no habrían sido sustancialmente diferentes, ni más graves y numerosos que los ocurridos entre 1931 y 1934.

Por tanto, en la primavera de 1936 no se habría producido un serio problema de orden público que desbordara al gobierno. Muy al contrario, este siempre actuó con firmeza e incluso con desmedida contundencia. En igual sentido tampoco se habrían manifestado actitudes, lenguajes e impulsos revolucionarios entre las fuerzas obreras del Frente Popular que, tras las elecciones, ofrecieron su apoyo al gobierno republicano. Como ya hicieran en la insurrección de octubre de 1934, tales fuerzas no habrían minado el orden constitucional, pues sólo se movilizaron para defender la República de la amenaza del fascismo. Su puesta en escena en las calles y en los tajos en realidad respondía a motivacio-

nes «constructivas» que solo buscaban mejorar la posición de los trabajadores y de los desposeídos, de ahí que presionasen al gobierno para que acelerase las reformas prometidas y a los propietarios y patronos para que no obstaculizaran su aplicación. Y es que todas las fuerzas que sostuvieron la República del Frente Popular, sin distinción, habrían actuado en realidad de acuerdo a objetivos y principios democráticos, en virtud del proyecto político «reformista» y «modernizador» que alentaron. Esta explicación concluye afirmando que los historiadores que no aceptan tales postulados incurren en un ejercicio ahistórico y anacrónico al extrapolar el concepto y los contenidos de la democracia actual a los años treinta (7).

El cuadro expuesto no encuentra equivalencia con el que ofrece en su libro el historiador italiano basándose en fuentes, datos y argumentos difícilmente rebatibles. De acuerdo con él, a partir de las elecciones de febrero de 1936 se desarrollaron unas secuencias conflictivas, antidemocráticas y violentas donde cupo un papel protagonista –no exclusivo pero sí destacado– a la izquierda obrera más radical, bajo los impulsos de la revancha y el maximalismo, que no se explican únicamente por razones ideológicas, sino en virtud, primero, de la frustración que le supuso a los socialistas el desplazamiento del poder a finales de 1933 y, segundo, por la represión posterior a la insurrección del 34. Esta última no se escenificó sólo en las cárceles y en los juicios, sino también en las represalias sufridas por los militantes en el mercado de trabajo y demás planos de la vida cotidiana. En la senda de otros autores, Ranzato subraya el acoso y las prácticas coactivas que emplearon los socialistas y los comunistas (y en menor medida, esta vez, los anarquistas) contra sus adversarios conservadores. La victoria del Frente Popular fue interpretada por buena parte de las masas izquierdistas como una ocasión de oro para cambiar de raíz las relaciones de poder. El panorama de violencias y coacciones asustó, desde luego, a las clases dominantes y a la opinión conservadora más en general, pero el espectáculo también alarmó a muchos sectores moderados de tendencia progresista (aquí reside una de las aportaciones principales de este estudio).

De la misma forma, entre otras muchas cuestiones, se da cuenta de la impotencia del gobierno republicano para contener los impulsos mencionados. Tal

---

(7) Ni que decir tiene que esa acusación pasa por alto la existencia durante el periodo de entreguerras, en Europa y otras latitudes, de regímenes democráticos parlamentarios y pluralistas que nada tenían que ver con el concepto de *democracia popular* con el que la historiografía *frentepopulista* identifica aquellos años. Regímenes que preservaban las libertades individuales y colectivas más elementales, la división y el control del poder, la alternancia pacífica en el gobierno, el sufragio universal (incluido el voto de las mujeres en algunos casos) o las elecciones limpias, mostrando algunos incluso una sincera vocación de profundizar también en la construcción de la ciudadanía social (Alemania, Suecia, Noruega, Checoslovaquia, etc.). De la misma forma, se silencia el hecho de que sectores significativos (posiblemente no mayoritarios) de la opinión pública española compartían los contenidos generales de esa cultura liberal-democrática y pluralista. De consulta obligada: Giovanni Sartori: *¿Qué es la democracia?*, Madrid, 2003 y David Held: *Modelos de democracia*, Madrid, 2009.

impotencia estuvo ligada a su dependencia parlamentaria de los partidos obreros. Conviene destacar un hecho sumamente elocuente a estos efectos: en el curso de cuatro meses, en las 46 provincias del país que estaban bajo mando gubernamental (excluida Catalunya) se registraron 41 cambios de gobernadores. De ellos, 19 fueron trasladados a otra provincia y un total de 22 fueron destituidos o dimitieron. Así, solo 15 provincias mantuvieron el mismo gobernador durante todo el periodo.

Ciertamente, muy ciego hay que estar para no ver que el gobierno mostró una tolerancia desmedida –cuando no manifiesta debilidad– ante el proceso de radicalización de las izquierdas obreras, reflejado en múltiples ámbitos. En pocas semanas, la militarización de sus organizaciones adquirió, sobre todo en la capital, una consistencia, una visibilidad y unas funciones que indicaban un notable salto cualitativo respecto al pasado. El lenguaje que esgrimieron por doquier fue abiertamente revolucionario. El movimiento de ocupación de tierras de aquella primavera, las arbitrariedades e ilegalidades cometidas por las autoridades locales izquierdistas en infinidad de rincones de la España rural, la proliferación de huelgas en número e intensidad que no tenía precedentes (de «orgía de huelgas» habló Gerald Brenan, testigo de aquellas convulsiones), las coacciones a los propietarios, la subida espectacular de los salarios y el recorte de jornada sin negociación previa, los alojamientos forzosos de parados impuestos a los empleadores de toda condición, las manifestaciones anticlericales (con incendio de templos de por medio), el acoso permanente a los militantes derechistas y el asalto de sus sedes, etcétera, todo ello evidencia la existencia de pulsiones de extrema radicalidad y discursos revolucionarios desconocidos en extensión y visceralidad hasta entonces (ni siquiera con la salvedad de la coyuntura que antecedió a la insurrección de 1934). Todas estas secuencias no se las inventaron ni amplificaron los líderes derechistas en el Parlamento (otra cosa es que algunos las utilizaran con fines espurios, lo cual es distinto).

A esos efectos, Ranzato nos recuerda que un historiador tan poco sospechoso de conservador como Jacques Maurice afirmó hace casi cuatro décadas que la «revolución agraria» ya se había iniciado en buena parte de España un poco antes del estallido de la guerra civil. Con una valoración como esa se podrá estar o no de acuerdo, como con otras vertidas en el libro, pero de lo que no cabe duda, como demuestra Ranzato y han suscrito otros autores, es que la idea y los modos revolucionarios se difundieron a velocidad desconocida en una parte amplia y creciente de aquella sociedad. Lo cual, sin duda, tuvo consecuencias. Sin ir más lejos, generó una no menos extensa difusión del miedo en otros segmentos sociales, más allá del experimentado por las clases altas al ver amenazados sus privilegios y su patrimonio. El miedo se propagó con simétrica rapidez entre las clases medias, pero no sólo las de raigambre católica y conservadora, sino también las que se habían mantenido fieles desde el principio al ideario republicano democrático y reformista.

Cuando Ranzato establece estos hechos, y otras muchas consideraciones inteligentes para cuyo comentario aquí no hay espacio, no pretende en modo alguno legitimar el golpe del 18 de julio de 1936, que desde un punto de vista democrático no tiene ninguna justificación. Sólo busca dejar constancia de cómo el miedo a la revolución a la postre favoreció notablemente la insurrección militar y le proporcionó unos apoyos que otras intentonas golpistas previas no habían logrado (el contraejemplo sería la encabezada por Sanjurjo el 10 de agosto de 1932). Que no hubiera una revolución comunista en marcha ni una estrategia bien definida en ese sentido no rebate estas afirmaciones. En la interpretación de Ranzato, el problema de fondo para comprender la acusada inestabilidad política y la intensa conflictividad de la primavera de 1936 fue el originario del Frente Popular: una coalición electoral y luego de gobierno constituida por «burgueses» y «proletarios» que divergían no sólo sobre los fines últimos, sino también sobre los fines a corto plazo, entre optar por las reformas y la revolución. Por tanto, concluye, lo que resulta discutible es «perpetuar la imagen de una España de anteguerra básicamente liberal y democrática, con un gobierno capaz de garantizar la continuidad de su régimen político-económico sin ningún peligro concreto de subversión revolucionaria, que habría sido arrastrada a la guerra civil sólo por un golpe militar reaccionario y fascista».

*Fernando del Rey*

Universidad Complutense de Madrid

ROBERT M. EDSSEL y BRET WITTER: *The monuments men. La fascinante aventura de los guerreros del arte que impidieron el expolio cultural nazi*; Destino, Barcelona, 2012.

Desde mediados de los años noventa del pasado siglo el expolio de obras de arte –y de otro tipo de bienes– constituye una de las líneas de investigación más fructíferas sobre el nazismo. La caída del muro de Berlín, el final de la guerra fría, la descomposición de la URSS y la reunificación de Alemania retornaron a un primer plano de la actualidad diversos problemas cerrados en falso en la posguerra mundial, entre ellos el de la devolución a sus legítimos dueños de los bienes expoliados por los nazis. En 1997, la *Nazi Gold Conference*, celebrada en Londres, promovió la creación de comisiones nacionales de investigación sobre el paradero del oro saqueado por el Tercer Reich y no localizado o no restituido en la posguerra. Al año siguiente, la *Conference on Holocaust Era Assets* de Washington dedicó sus esfuerzos al problema del arte expoliado entre 1933 y 1945 y que no fue reintegrado a sus propietarios. Pero las iniciativas gubernamentales fueron a la zaga del trabajo de periodistas e historiadores que, mediada la década, llamaron la atención sobre el expolio y, especialmente, sobre el expolio de obras de arte.